Mandatos del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

REFERENCIA:
AL CUB 4/2018

13 de julio de 2018

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de conformidad con las resoluciones 37/8, 34/18 y 34/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información acerca **de la condena del defensor de los derechos humanos ambientales, el Sr. Ariel Ruiz Urquiola, sobre las acusaciones de desacato a la autoridad presuntamente en represalia por su trabajo medioambiental.**

Sr. **Ariel Ruiz Urquiola** es un científico biólogo y anteriormente trabajaba como investigador en la Universidad de la Habana. El Sr. Urquiola ha estado involucrado en activismo ambiental y tiene un historial de criticar públicamente a las autoridades cubanas en relación con temas medioambientales. En 2008, en un seminario internacional que tuvo lugar en México en el que participó como investigador de la Universidad de la Habana, expresó públicamente su crítica contra la presunta pesca ilegal de tortugas marinas en Cuba. En 2009, la administración universitaria suspendió su trabajo con las tortugas marinas. Entre los años 2010 y 2013, continuó su trabajo en la Universidad de la Habana cambiando su investigación a la fauna en la zona de la Sierra de los Órganos en la provincia de Pinar del Río. Después de un desacuerdo con la dirección, primero fue degradado de su posición, y en 2016, fue despedido de la Universidad debido a presuntas repetidas ausencias. Tras su despido, Ariel criticó públicamente la decisión como "un abuso de poder". El despido fue confirmado por el Tribunal Popular Municipal de La Habana Vieja en una sentencia del año 2016.

Según la información recibida:

En el año 2015, el Sr. Ariel Ruiz Urquiola compró una casa en la zona de la Sierra del Infierno, en el Parque Nacional de Viñales, en la provincia de Pinar del Río. Después de adquirir los derechos de usufructo para el uso de la tierra de propiedad estatal que rodea su casa, el Sr. Urquiola inició un proyecto medioambiental en 2016 para preservar especies locales y desarrollar proyectos agrícolas sostenibles.

En la mañana del 3 de mayo de 2018, dos guardabosques visitaron la granja del Sr. Urquiola y le preguntaron si tenía permisos para la construcción de una valla alrededor de la tierra, para talar algunas palmeras y para ser propietario de una sierra mecánica. El Sr. Urquiola explicó que los árboles habían sido dañados por un rayo y les invitó a la casa para mostrar su permiso legal. En el camino a la casa, pidió a los guardabosques que le mostraran su identificación y se refirió a uno de ellos como "policía rural", un término que fue interpretado por los guardas forestales como "guardias rurales", y que tiene una connotación negativa en Cuba debido a su conotación con funcionarios de la dictadura de Fulgencio Batista. Los guardabosques salieron del área, y más tarde por la noche, tres agentes de policía llegaron con una orden judicial, detuvieron al Sr. Urquiola y lo llevaron a la cercana comisaría de policía de Viñales.

El Sr. Urquiola fue acusado de desacato por falta de respeto a los guardabosques. Fue condenado el 8 de mayo 2018 a un año de prisión, la pena máxima a tenor del artículo 144.1 del Código Penal, por el Tribunal Municipal de Viñales. La decisión fue confirmada en apelación por el Tribunal Popular Provincial de Pinar del Río el día 22 de mayo de 2018. El abogado del Sr. Urquiola únicamente tuvo acceso al ecologista acusado y su expediente el mismo día del juicio.

El Sr. Urquiola fue inicialmente encarcelado en la Prisión Provincial de Pinar del Río y más tarde en junio, fue trasladado al Centro Correccional de Cayo Largo. Se alega que funcionarios de la prisión advirtieron a la familia del Sr. Urquiola de que no hablaran con la prensa internacional para no poner en riesgo sus visitas y la comunicación con el Sr. Urquiola.

Se alega que las autoridades deliberadamente encarcelaron al Sr. Urquiola en represalia por su trabajo medioambiental y en el intento de privarlo del uso de la tierra en que se basa su proyecto ambiental. Bajo la legislación nacional, los usuarios de tierras estatales pierden sus derechos de usufructo tras estar ausentes de la tierra. El Sr. Urquiola está expuesto a perder sus derechos de uso sobre la utilización del suelo debido a la condena a un año de prisión. El delito de desacato bajo el artículo 144.1 del Código Penal supone causar una restricción indebida del derecho a la libertad de expresión, como se ilustra en el caso del Sr. Urquiola, cuyo presunto delito fue caracterizar erróneamente el término utilizado para guardabosques.

Antes de la detención y condena, el Sr. Urquiola había divulgado con frecuencia violaciones de regulaciones medioambientales cerca de su finca en la Sierra del Infierno. Las autoridades al parecer no adoptaron ninguna medida, y los vecinos presuntamente comenzaron a intimidar al Sr. Urquiola, dañando a sus animales y cultivos. En una ocasión, alega haber recogido 82 trampas para ratas de caña, de lo cual informó al Parque Nacional de Viñales.

Según los informes, el 3 de julio, el Sr. Urquiola fue puesto en libertad condicional bajo "licencia extrapenal" por razones de salud. El Sr. Urquiola fue

hospitalizado después de iniciar una huelga de hambre en protesta por su detención y sentencia. La libertad condicional del Sr. Urquiola no lo exonera de la condena, y es posible que en el futuro pueda ser encarcelado nuevamente para continuar cumpliendo la condena.

Nos preocupa la condena del defensor de los derechos humanos ambientales, el Sr. Ariel Ruiz Urquiola, que parece tener relación con sus actividades legítimas de protección del medio ambiente, así como del efecto que tal prisión pueda tener en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por otras personas y por defensores de los derechos humanos medioambientales.

Mientras no queremos prejuzgar la veracidad de estos alegatos, nos gustaría llevar a la atención del gobierno de Su Excelencia el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, que establecen el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos de recibir su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.
2. Por favor, proporcione información referente a los fundamentos jurídicos de los cargos y la condena al Sr. Ariel Ruiz Urquiola y aclare cómo esto cumple con los compromisos y obligaciones de Cuba bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
3. Por favor, indique qué medidas se han adoptado para garantizar que los defensores de los derechos humanos medioambientales en Cuba sean capaces de llevar a cabo su trabajo legítimo en un entorno seguro y propicio sin miedo de amenazas o actos de intimidación y acoso de ningún tipo.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

John H. Knox

Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible

David Kaye

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Michel Forst

Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con los hechos y preocupaciones anteriormente alegados, nos gustaría llamar su atención sobre las siguientes normas de derechos humanos:

Nos gustaría llevar a la atención del Gobierno de Su Excelencia el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, que establecen el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Deseamos hacer referencia a los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (A/HRC/37/59, anexo), que resumen las principales obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Es decir, el principio marco 1 establece que los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En el mismo sentido, el principio 2 reitera que los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. El principio 4 reafirma que los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones de derechos humanos o cuestiones del medio ambiente puedan actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia.

Deseamos además hacer referencia a la resolución del Consejo de derechos humanos 32/31, que, en el apartado 4, insta a los Estados a que creen y mantengan, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que la sociedad civil pueda funcionar sin trabas ni inseguridad. Insta además a los Estados a que velen por el acceso a la justicia y por la rendición de cuentas, y que acaben con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos contra los agentes de la sociedad civil.

Recordamos la resolución del Consejo de derechos humanos 31/32, que en el párrafo 1 reafirma la necesidad urgente de respetar, proteger, promover y facilitar la labor de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales como factor vital para la efectividad de esos derechos, en particular en relación con el medio ambiente y las cuestiones relativas a la tierra y el desarrollo.

También nos gustaría llamar a la atención del Gobierno de Su Excelencia los principios fundamentales enunciados en la declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, también conocida como la declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. En particular, nos gustaría hacer referencia a los artículos 1 y 2 de la declaración, que indican que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.